

D.S.J.: 234/19

Se ha recibido, en esta Dirección de Servicios Jurídicos, petición de informe cursada por la Dirección de *Gestión Económica y Aprovisionamiento*, en relación con el contrato denominado **“MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN PANDORA FMS PARA SU USO EN MADRID DIGITAL”** (ECON-000154-2019), a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad.

A la vista de los antecedentes y de la normativa aplicable, tenemos el honor de emitir el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con fecha 18 de julio de 2019 ha tenido entrada en este Servicio Jurídico la citada petición de Informe, acompañada del Pliego de Prescripciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la ejecución del contrato. Se acompaña igualmente, con la misma fecha, informe razonado justificativo de la necesidad, informe de insuficiencia de medios, informe de valoración económica, certificado de exclusividad de la empresa a invitar al procedimiento, y la propuesta de contratación del expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (en adelante la Agencia), en virtud de lo dispuesto en el Apartado 4.6 del Artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. Núm. 311, 30 de diciembre de 2005) se



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

configura como un ente público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid que, perteneciendo a la Administración institucional de ésta, cuenta con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión.

Así mismo, y en relación a lo señalado, la Agencia merece la consideración de Administración Pública, a los efectos contractuales, en los términos referidos en el artículo 3.2, letra b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y, sus contratos deben someterse al régimen previsto en dicha norma para los contratos administrativos, por tener ese carácter. A estos efectos el presente informe se emite con arreglo a lo dispuesto y con los límites derivados de lo señalado en el artículo 122.7 de la LCSP, en relación con lo señalado en el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y 1.2 y 2 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Por tanto, respecto al ámbito normativo, **es conforme** señalar, que éstos tienen carácter administrativo, quedando las partes sometidas expresamente a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en su correspondiente de prescripciones técnicas.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y Servicios



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCCPM) y sus normas complementarias.

Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Segunda.- Debe destacarse el principio general, que indica que los entes del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación, así se deduce del artículo 28 de la LCSP. En este sentido ***debe mencionarse lo señalado en la memoria justificativa de la necesidad emitida en fecha 12 de julio de 2019 por la Dirección de Soporte Multicanal al Usuario de la Agencia***, promotora de dicho expediente:

*“...El personal técnico de Madrid Digital, implicado en la resolución de incidencias técnicas de infraestructuras y aplicaciones, requiere de una herramienta de software actualizada y de fácil uso para llevar a cabo sus tareas. En este sentido la aplicación **Pandora FMS** es un programa modular de fácil uso para implementar la monitorización, supervisión y diagnóstico de problemas relacionados con el estado de las infraestructuras que soportan los aplicativos que provee Madrid Digital.*

Madrid Digital dispone de licencias de la referida aplicación en régimen de propiedad para el personal técnico de Madrid Digital, que utiliza esta herramienta para realizar las labores de supervisión del rendimiento de las aplicaciones e infraestructuras y facilitar el diagnóstico de incidencias”.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

En la misma línea, y de conformidad con lo señalado en el artículo 99 de la LCSP, en relación a la determinación del **objeto del contrato, queda descrito** en los pliegos que van a regir la contratación, como:

“Este contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, y evolutivo y actualización de versiones del producto “PANDORA FMS”, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.”.

Sobre este asunto, se recomienda, que se utilice la misma definición del objeto del contrato, en todos los documentos que configuran el expediente.

Todo ello debe acomodarse con los fines institucionales definidos en la Ley de creación de esta Agencia (Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, modificadas parcialmente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales (B.O.C.M. núm. 311, de 31 de diciembre de 2015)), incluido lo señalado en el apartado 4 y 5 de la Disposición Adicional Primera de la mencionada Ley de creación.

Tercera.- En relación a la **necesidad de justificar la no división del contrato en Lotes**, de conformidad con lo señalado en el apartado 3.b) del artículo 99 de la LCSP, se acredita dicha previsión en el apartado 1 de la Cláusula Primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que señala que:

*“Dadas las características del servicio y los trabajos que constituyen el objeto del contrato, y la interrelación entre dichos servicios que han de prestarse sobre una única solución, que únicamente pueden ejecutarse por la empresa **ÁRTICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.**, se justifica la no división del objeto del contrato en lotes, teniendo en cuenta que no existen distintas fracciones del objeto del contrato que gocen de sustantividad propia y que sean susceptibles de utilización y aprovechamiento por separado.*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

En virtud de lo anteriormente expuesto, y a la vista de que el objeto del contrato ha de ser ejecutado por la misma empresa adjudicataria, no es viable la división del objeto del contrato en lotes.”

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116.4 f) de la LCSP, en relación a los *motivos relativos a la insuficiencia*, falta de adecuación o no conveniencia de ampliación de los medios disponibles para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato de referencia, queda acreditada dicha previsión, mediante el **informe sobre insuficiencia de medios **emitido de fecha 12 de julio de 2019 por parte del Director de Soporte Multicanal al Usuario de la Agencia, promotor de dicho expediente**, que señala:**

*“ La prestación del servicio de “MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN PANDORA FMS PARA SU USO EN MADRID DIGITAL”, requiere de un conocimiento específico sobre el mismo del que sólo dispone la empresa **ÁRTICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.**, al poseer, con carácter exclusivo, los derechos de comercialización, distribución y explotación del producto software y, en consecuencia, la única que se encuentra en posesión de los conocimientos y medios técnicos que se precisan para acometer los trabajos que constituyen el objeto del contrato. Todo ello lleva a la gestión de esta necesidad a través de la contratación con la mencionada empresa.”*

Quinta.-En relación a la *determinación del presupuesto base de licitación*, se aporta documento de valoración económica emitido por el Director de Gestión Económica y de Aprovechamiento, de fecha 12 de julio de 2019, en el que se señala lo siguiente:

“La determinación del presupuesto base de licitación se ha realizado garantizando que el mismo sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, estimándose su importe atendiendo al precio general de mercado, y en particular:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

*El importe total el mantenimiento de las licencias PANDORA, responde a las tarifas establecidas por la empresa, **ARTICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.**”.*

Con carácter general debe señalarse, respecto de su regulación, que la Ley impone que el presupuesto base de licitación se calcule por el órgano de contratación ajustándose a los precios del mercado vigentes en el momento de su elaboración. Esta regla es coherente con la que se establece en el artículo 101.7 de la LCSP para calcular el valor estimado de los contratos, que prevé que *“la estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicio el procedimiento de adjudicación del contrato”*. Y también está estrechamente relacionada con la que poco más tarde se configura en el artículo 102 LCSP, que ordena a los órganos de contratación cuidar de que *“el precio **sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato** mediante la **correcta estimación** de su importe, **atendiendo al precio general de mercado**, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación, y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados”*.

Tal y como se justifica en el presupuesto base de licitación, éste, se ha determinado a en función de precios referidos a tarifas, **conforme a lo dispuesto en los Artículos 309 LCSP y 197** del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Todo ello debe estar inspirado en la previsión normativa del *“principio del control del gasto”* que aparece recogido en el artículo 1 del TRLCSP, que dispone que : *“La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Sexta.- En relación al **valor estimado del contrato**, de conformidad con lo señalado en el artículo 101 de la LCSP, cabe señalar que viene determinado por el importe total del contrato, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, más el importe correspondiente a las eventuales prórrogas, siendo la duración máxima del contrato **60 meses**, tal y como se recoge en el **apartado 3 y 16 de la Cláusula Primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares**.

Tal y como se señala en el apartado 19 de la Cláusula Primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no se contemplan modificaciones contractuales, de las previstas en el art. 203 y art. 204 de la LCSP.

Séptima.- En cuanto al procedimiento de adjudicación seleccionado, es decir, **el procedimiento negociado sin publicidad**, en aplicación de los Artículos es 131.2, 168 a) 2 y 170 de la LCSP, se recoge en la memoria justificativa de la necesidad, emitido de fecha 12 de julio de 2019 por la **Dirección de Soporte Multicanal al Usuario de la Agencia**, promotora de dicho expediente, en lo referente a la procedencia de encomendar la ejecución del contrato a un único empresario por motivos relativos con la protección y derechos en exclusiva, se indica que:

*“Para poder seguir dando los servicios de monitorización y supervisión de las infraestructuras y Sistemas de Información y realizar un rápido diagnóstico de las incidencias en los servicios prestados a los usuarios de la Comunidad de Madrid se necesita disponer del servicio de mantenimiento de las licencias Pandora FMS, para que **ÁRTICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.**, propietaria de los derechos de propiedad intelectual del software y única*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

compañía autorizada y con capacidad para la modificación del mismo, suministre las nuevas actualizaciones y se comprometa a la resolución de los posibles fallos.”.

En relación la aplicación de este procedimiento se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado que en el informe 11/2004, de 7 de junio, referido a la aplicación del procedimiento negociado del artículo 210, letra b) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, establece como doctrina que *“...La utilización del procedimiento negociado tiene carácter excepcional y sólo procede cuando concurren las causas taxativamente previstas en la ley, que son de interpretación estricta y han de justificarse ‘debidamente’ en el expediente. La causa justificadora del procedimiento negociado del artículo 210 b) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es que, solamente, exista un único empresario o profesional al que pueda encargarse el objeto del contrato y que ello sea debido a causas técnicas, artísticas y de protección de derechos exclusivos. Resulta evidente, por tanto, que esta causa justificadora del procedimiento negociado no reside en el carácter artístico del trabajo, sino en que únicamente haya un empresario o profesional al que pueda encargársele el trabajo, sea por razones técnicas, artísticas o de exclusividad de derechos”.*

La misma doctrina se reitera en Informe 52/06, de 11 de diciembre, en el que concluye que: *“Como se aprecia claramente lo decisivo para la utilización del procedimiento negociado, por esta causa es que exista un solo empresario al que pueda encomendarse la ejecución de la obra, siendo motivo indirecto y remoto el que ello sea por razones técnicas, artísticas o de exclusividad de derechos. En la misma línea, el Informe 35/15, de 13 de julio de 2017: sobre el procedimiento negociado por razones técnicas, se configura como una excepción a la regla general. Alude dicho informe, al supuesto de que “los suministros o los servicios solo puedan ser proporcionados por un operador económico concreto porque no exista competencia por razones técnicas. Que*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

existan razones técnicas que lo justifiquen y que estas razones hagan absolutamente necesaria la adjudicación del contrato a una empresa determinada”. ...“La ley no se refiere a la mera conveniencia u oportunidad de adjudicar el contrato directamente a un empresario. Por el contrario, este recurso sólo cabe cuando la ejecución del contrato sólo se pueda encomendar a un único empresario.”, por tanto, que exista una única empresa capacitada para ejecutar el contrato, no existiendo concurrencia efectiva en este supuesto, el órgano de contratación asumirá la carga de probar que procede su aplicación. En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal de Cuentas en su informe 1066, de 20 de diciembre.

En todo caso, los informes de la Junta 35/2015, 26/1998 o el Informe 23/10, de 24 de noviembre de 2010, entre otros muchos, especifican que no es una cuestión jurídica, sino técnica, que corresponde apreciar al órgano de contratación y que debe recogerse su justificación, en informe del técnico correspondiente. En el mismo sentido, el Informe 23/10, de 24 de noviembre de 2010 “ (...) *Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado*”.

A modo de ejemplo, el pronunciamiento contenido en el fundamento decimocuarto de la resolución 718/2014 de 26 de septiembre del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sostiene que: *"Este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente (por todas, Resoluciones de 26 de enero, 30 de marzo de 2012, 4 de abril de 2014 ó 19 de mayo de 2014) sobre la discrecionalidad técnica que asiste a la Administración en la valoración de criterios eminentemente técnicos, señalando que "es de plena aplicación a los criterios evaluables en función de juicios de valor la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de la denominada discrecionalidad técnica de la Administración. Ello supone que tratándose de cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos."*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

En relación a lo mencionado, debe tenerse en consideración que constituye una regla esencial del Derecho comunitario europeo, y también del Derecho interno español, por trasposición de aquella, la de que todos los supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de licitación, supone una excepción a los principios generales de transparencia, publicidad, libre concurrencia y no discriminación e igualdad de trato entre los posibles licitadores. ***Por ello, su interpretación debe ser restrictiva, y su ámbito de aplicación no puede extenderse sino a los casos estrictamente comprendidos en los términos literales contenidos en las normas por las que se regulan.*** En la misma línea, debe tenerse en cuenta lo recogido en el Considerando 50 de la Directiva 2014/24/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratación administrativa:

"En razón de sus efectos perjudiciales sobre la competencia, los procedimientos negociados sin publicación previa de un anuncio de licitación deben utilizarse únicamente en circunstancias muy excepcionales. Las excepciones deben limitarse a aquellos casos en que la publicación no sea posible, bien por razones de extrema urgencia provocada por acontecimientos imprevisibles y no imputables al poder adjudicador, bien cuando esté claro desde el principio que la publicación no generaría más competencia o mejores resultados de contratación, por ejemplo porque objetivamente solo haya un operador económico que pueda ejecutar el contrato. Este es el caso de las obras de arte en las que la identidad del artista determina intrínsecamente el valor y el carácter únicos del propio objeto artístico. La exclusividad puede también surgir por otros motivos, pero solo las situaciones de exclusividad objetiva pueden justificar el recurso al procedimiento negociado sin publicación, siempre que la situación de exclusividad no haya sido creada por el propio poder adjudicador con vistas al futuro procedimiento de contratación.

Los poderes adjudicadores que se acojan a esta excepción deben motivar por qué no existen otras alternativas, como por ejemplo la utilización de otros canales de distribución incluso fuera del Estado miembro del poder adjudicador o la toma en consideración de obras, suministros o servicios comparables desde el punto de vista funcional.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

Cuando la **situación de exclusividad se deba a razones técnicas**, estas deben definirse y justificarse rigurosamente para cada caso particular. Entre estas razones cabe citar la *práctica imposibilidad técnica* de que otro operador económico alcance los resultados necesarios, o la *necesidad de utilizar conocimientos técnicos, herramientas o medios específicos* que solo estén a disposición de un único operador económico. También pueden derivarse razones técnicas de los requisitos específicos en materia de interoperabilidad o de seguridad que deban cumplirse a fin de garantizar la idoneidad de las obras, suministros o servicios que vayan a contratarse...”.

Por último, en relación a lo señalado, **se aporta certificado emitido por el socio fundador y actual CEO de la entidad mercantil Artica Soluciones Tecnológicas S.L.**, de fecha 10 de julio de 2019, en el que indica:

"Artica posee los derecho de propiedad intelectual, los dominios pandorafms.com, pandorafms.org y artica.es así como el registro de la marca PANDORA FMS Enterprise Edition y que por lo tanto es el Fabricante de dicho software.

Por lo tanto, Artica ST es la única compañía autorizada y con capacidad para la modificación del software Pandora FMS Enterprise Edition, para el lanzamiento de nuevas versiones del producto, subsanación de errores y prestar el soporte técnico y el mantenimiento de versiones a Madrid Digital.”.

En todo caso, como señala la Resolución nº 29/2016 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, de 14 de Junio de 2016: **“De hecho, el órgano de contratación es quien debe asumir la carga de la prueba que concurren las circunstancias que habilitan la aplicación de este supuesto, no siendo suficiente, por su propia excepcionalidad, la incorporación en el expediente de una declaración responsable o certificado de exclusividad de la misma empresa que justifique que es el único que puede ejecutar la prestación objeto del contrato, sino que es necesario que el órgano de contratación mediante, en su caso, los servicios técnicos competentes, justifique y acredite la exclusividad”.**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

En el mismo sentido el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la Resolución 504/2014, de 4 de julio, establece que es necesario incorporar al expediente de los contratos adjudicados por procedimiento negociado por razones de exclusividad, un certificado emitido por un técnico, independiente de la empresa adjudicataria, en el cual se acredite efectivamente que esta es la única que puede realizar el objeto del contrato.

Novena.- En otro orden de cosas, señalar que ***queda recogido en la cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares***, la exigencia prevista en el artículo 308.2 de la LCSP relativa a “... A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente contratante”.

Así mismo, también ***queda recogido en la cláusula 35 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares***, la obligación del contratista del cumplimiento de “*las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP, así como la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato.*”

“*El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el Órgano de Contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.*”



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

Por último, y como así queda recogido en la **Cláusula 34 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares**: *“El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2%, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de cincuenta o más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligación, de acuerdo con el Artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril.”.*

Es cuanto tiene el honor de informar.

**El Director de los Servicios Jurídicos de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid**

Luis Moll Fernández-Fígares.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018476733645704814144**

DIRECTOR DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE APROVISIONAMIENTO.